



Asamblea General

Distr. general
29 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 61º período de sesiones
(29 de agosto a 2 de septiembre de 2011)**

Nº 39/2011 (República Árabe Siria)

Comunicación dirigida al Gobierno el 3 de febrero de 2011

Relativa a: Tuhama Mahmoud Ma'ruf

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de retención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. Tuhama Mahmoud Ma'ruf, nacida en 1964, está casada y tiene dos hijos. Es dentista y habitualmente trabaja y vive en Aleppo. La Sra. Ma'ruf está casada con Bakr Sidqi, escritor y antiguo preso político.

4. Se informa de que, el 6 de febrero de 2010, la Sra. Ma'ruf fue detenida por las fuerzas de seguridad para la represión de delitos de la división de Aleppo, debido a su presunta asociación con el Partido Comunista de los Trabajadores de la República Árabe Siria.

5. En 1992, la Sra. Ma'ruf había sido detenida bajo la acusación de pertenecer al Partido Comunista de los Trabajadores de Siria, que había sido prohibido a principios del decenio de 1980. La Sra. Ma'ruf era por entonces una estudiante de medicina y tenía 26 años. Estuvo encarcelada un año, pero fue puesta en libertad en marzo de 1993 a la espera de juicio. El 5 de enero de 1995, la Sra. Ma'ruf fue condenada por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado a seis años de prisión con trabajos forzados por pertenencia a una organización secreta destinada a cambiar la situación económica y social del Estado (artículo 306 del Código Penal sirio). No obstante, esta pena no se ejecutó, y la Sra. Ma'ruf continuó en libertad.

6. El 9 de febrero de 2010, el abogado de la Sra. Ma'ruf solicitó su puesta en libertad, y cuando se mencionó la pena no cumplida, el abogado explicó que dicha pena había prescrito en virtud de las disposiciones relativas a la prescripción contenidas en el artículo 162 del Código Penal sirio. El Fiscal General del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado rechazó la solicitud de puesta en libertad formulada por el abogado de la Sra. Ma'ruf.

7. La Sra. Ma'ruf fue conducida posteriormente a una división de los servicios de seguridad política en Damasco para cumplir la condena que se le impuso en 1995. Fue trasladada a la prisión de Adra, donde fue recluida en la sección especial para mujeres del pabellón de seguridad política.

8. La fuente sostiene que la detención y el encarcelamiento de la Sra. Ma'ruf son consecuencia directa de su pertenencia a un partido político, el Partido Comunista de los Trabajadores de Siria.

Respuesta del Gobierno

9. El Grupo de Trabajo dirigió una comunicación al Gobierno el 3 de febrero de 2011 y un recordatorio el 10 de junio de 2011. El Grupo de Trabajo señaló que agradecería al Gobierno que en su respuesta proporcionara información detallada sobre la situación actual de la Sra. Ma'ruf y precisiones acerca de las disposiciones jurídicas que justificaban su permanencia en prisión.

10. Se recibió una respuesta del Gobierno el 14 de julio de 2011. El Grupo de Trabajo acoge con beneplácito la cooperación del Gobierno. El Gobierno informa al Grupo de Trabajo de que la Sra. Ma'ruf ha sido puesta en libertad en virtud de la amnistía general de 30 de mayo de 2011. Con arreglo al párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo revisados, el Grupo de Trabajo considera que el presente asunto reviste tal gravedad que justifica la aprobación de una opinión. De conformidad con sus métodos de trabajo revisados, el Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión sobre la base de la información presentada.

Deliberaciones

11. En el presente caso, la primera pregunta que se plantea es si la privación de libertad fue resultado del ejercicio de los derechos y libertades enunciados en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

12. El Grupo de Trabajo ha examinado la relación entre el encarcelamiento de la Sra. Ma'ruf y el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión. La fuente alega que su encarcelamiento es consecuencia directa de su pertenencia al Partido Comunista de los Trabajadores de Siria y no tiene otra justificación. El Grupo de Trabajo no ha recibido información alguna del Gobierno que pueda invalidar la denuncia de que se han violado las garantías de los derechos humanos relativos a la libertad de opinión y de expresión. Dado que el Gobierno no ha rebatido los indicios razonables presentados, el Grupo de Trabajo no tiene más alternativa que concluir que el encarcelamiento de la Sra. Ma'ruf constituyó una restricción del ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión, y que no había razones que justificaran la restricción. La detención arbitraria corresponde a la categoría II aplicable a los casos presentados al Grupo de Trabajo.

13. La Sra. Ma'ruf fue encarcelada para que cumpliera una condena por delitos políticos que ya había prescrito. El artículo 162 del Código Penal sirio prevé que la prescripción de las condenas penales se produce cuando transcurre el doble de la duración de la condena impuesta por el tribunal. No obstante, el plazo de prescripción no puede ser superior a 20 años o ser inferior a 10 años. El plazo de prescripción en otros casos es de 10 años. En el presente caso, la Sra. Ma'ruf fue condenada inicialmente a 6 años de prisión en 1995 y, por tanto, el plazo de prescripción aplicable es de 12 años. Sin embargo, la Sra. Ma'ruf fue detenida en febrero de 2010, esto es, 15 años después de la condena inicial y 3 años después de que se cumpliera el plazo de prescripción de 12 años. Esto constituye una violación de las debidas garantías procesales. El Grupo de Trabajo también reitera que la jurisdicción militar y excepcional del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, ante la cual no cabe recurso, no satisface las debidas garantías procesales.

14. En su jurisprudencia constante, el Grupo de Trabajo ha sostenido que el enjuiciamiento de estas causas por tribunales militares supone una violación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (véase, por ejemplo, la Opinión N° 27/2008). En sus observaciones finales sobre la República Árabe Siria, el Comité de Derechos Humanos señaló que "sigue preocupado por las numerosas denuncias de que en los procesos que sustancian esos tribunales no se respetan las garantías previstas en el artículo 14 del Pacto" (CCPR/CO/71/SYR, párr. 17). En sus observaciones finales sobre el informe inicial de Siria, el Comité contra la Tortura expresó "su profunda preocupación por las numerosas, concordantes y graves alegaciones según las cuales ese tribunal no funciona de conformidad con las normas judiciales internacionales" (CAT/C/SYR/CO/1, párr. 11). El Comité añadió que el Tribunal Supremo de Seguridad Estatal "tiene la facultad de establecer penas e imponer sanciones penales por delitos que están definidos en términos muy amplios" (*ibid.*). Por último, en su Observación general N° 32 (2007) sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y

cortes de justicia, el Comité de Derechos Humanos reafirmó que las garantías previstas en el artículo 14 son aplicables a los tribunales ordinarios y excepcionales de carácter civil y militar (CCPR/C/GC/32, párr. 22).

15. La privación de libertad de la Sra. Ma'ruf constituyó una violación de los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, esta privación de libertad corresponde también a la categoría III aplicable a los casos presentados al Grupo de Trabajo.

16. Dado que la Sra. Ma'ruf ha quedado en libertad tras serle levantada la pena de prisión, la cual incumplía las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el remedio principal es la concesión del derecho efectivo a obtener reparación, de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es una expresión de principios generales. Las razones que pueden aducirse para justificar el encarcelamiento de la Sra. Ma'ruf no pueden invocarse en contra de una demanda de reparación.

17. El Grupo de Trabajo señala además que esta es solo una de sus varias opiniones en las que concluye que la República Árabe Siria ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (véase, por ejemplo, las opiniones Nos. 1/2011; 26/2011; 37/2011 y 38/2011). El Grupo de Trabajo recuerda a la República Árabe Siria su deber de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de no detener arbitrariamente y de poner en libertad y proporcionar una reparación a las personas arbitrariamente detenidas. El deber de cumplir esas obligaciones incumbe no solo al Gobierno, sino también a todos los funcionarios, incluidos los jueces, los agentes de policía y de las fuerzas de seguridad y los funcionarios penitenciarios competentes. Nadie puede contribuir a las violaciones de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo también subraya la responsabilidad que puede derivarse de la detención arbitraria cuando constituye un crimen de lesa humanidad con arreglo al derecho internacional consuetudinario.

Decisión

18. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de la Sra. Ma'ruf es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II y III aplicables a los casos presentados al Grupo de Trabajo.

19. El Grupo de Trabajo toma nota de que la Sra. Ma'ruf ha sido puesta en libertad, y señala que las medidas que corresponde ahora adoptar para remediar la situación incluyen la concesión de una reparación adecuada.

[Aprobada el 1º de septiembre de 2011.]